

Santiago, siete de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la parte demandante contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que, previo desestimar la nulidad formal, confirmó la de primera instancia que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por defectos de construcción.

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Segundo: Que la parte recurrente sustenta la nulidad formal en el artículo 768 número 5, relacionado con el artículo 170 números 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil; porque la sentencia recurrida descartó y excluyó de todo análisis a una contundente y abundante prueba documental, así como testimoniales de altísima calidad técnica y ética, elaborada por eminentes profesionales de la construcción e ingeniería del diseño estructural, destacados en su ejercicio profesional, como en la docencia universitaria.

Reprocha que la judicatura, sin fundamento legal alguno, desahució los medios de prueba ofrecidos y rendidos, declarando que la única prueba pertinente para resolver el asunto controvertido es el informe de peritos y no cualquiera, sino el de aquel nombrado por el tribunal, de acuerdo a la ritualidad del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior, solicita la invalidación del fallo y que se dicte el de reemplazo que describe.

Tercero: Que el motivo de casación que se invoca será rechazado, ya que la sentencia cuestionada, que confirma la de primera instancia, da estricto cumplimiento a lo prevenido en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, al hacer suya la fundamentación fáctica y jurídica de ésta, que recoge la valoración de la prueba rendida y funda normativamente la decisión a la que arribó, conteniendo la decisión del asunto controvertido, la que comprende todas las acciones y excepciones que se hicieron valer en el juicio, recayendo el reproche de la recurrente en la ponderación de los medios de prueba rendidos, lo que constituye una facultad privativa de la judicatura de fondo.

Cuarto: Que, de esta forma, no configurándose el vicio denunciado, el intentado debe necesariamente desestimarse en esta etapa de tramitación.

II.- Respecto al recurso de casación en el fondo.

Quinto: Que la parte recurrente denuncia infracción a los artículos 1698, 1699, 1700, 1702, 1712 del Código Civil, 341, 342 N°2, 346 N°3, 409, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil y artículos 18 y 19 de la Ley General de



Urbanismo y Construcciones, en relación con la Ley N°19.472, porque la judicatura no ponderó la prueba documental y testimonial rendida, no la comparó, ni elaboró las presunciones judiciales que se deducen de aquella. Enumera todos los antecedentes aportados por su parte al juicio; y acusa que el fallo impugnado descarta los informes de daños de suelos y la declaración testimonial de sus autores, sin analizar ninguno, desatendiéndolos por una supuesta falta de imparcialidad, concluyendo que la forma de resolver adecuadamente la contienda sometida a su decisión era la realización de un informe pericial, sin precisar ninguna norma que así lo exija, lo cual se debe a que sencillamente no existe tal disposición ni en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni en ninguna otra.

Solicita que se acoja el recurso de casación, se invalide la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo que describe.

Sexto: Que la judicatura de fondo tuvo por establecidos los siguientes hechos:

1.- Los demandantes son primeros compradores de los catorce inmuebles vendidos por la demandada inmobiliaria Ayres de Chicureo S.A. y construidos por la Constructora Novatec S.A.

2.- No se probaron los defectos de construcción que fundan la indemnización de perjuicios demandada.

Sobre la base de estos presupuestos fácticos y ante la falta de prueba de los vicios de edificación que se alegó, se rechazó la demanda, señalando que *“... en consecuencia no habiendo probado el actor la existencia de los daños constructivos invocados como fundamento de los perjuicios demandados en autos, se procederá al rechazo de la acción resarcitoria deducida.”*

Séptimo: Que parece pertinente tener en cuenta que sólo la magistratura del fondo se encuentra facultada para determinar los hechos del litigio y que efectuada dicha labor con sujeción a las denominadas normas reguladoras de la prueba, se tornan inalterables para este tribunal de casación con arreglo al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza, a menos que se denuncie eficazmente y se acredite la infracción a las referidas disposiciones.

En este sentido y de acuerdo con lo expuesto, es evidente que lo reprochado consiste en una divergencia entre la estimación de la recurrente acerca de cómo debía ponderarse la prueba rendida en juicio y la argumentación desarrollada en la sentencia como consecuencia de la aportada, resultando entonces que encierra la exigencia de una nueva valoración las probanzas ofrecidas, por cuanto de las normas denunciadas como infringidas, hay algunas



que, derechamente, no tienen la condición de reguladoras de la prueba, como es el caso de los artículos 1699 del Código Civil y 341, 409 y 428 del Código de Procedimiento Civil; otras, que siéndolo, no han sido infringidas, como ocurre con el artículo 1698 del Código Civil, puesto que no se encuentra alterada la carga de la prueba, y con los artículos 1700 y 1702 del Código Civil y 342 N°2 y 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil, porque en lo relativo a los instrumentos públicos y privados acompañados, éstos fueron apreciados en su mérito, con apego a las reglas de valoración de la prueba legal o tasada y, por último, en lo que concierne a las presunciones – 1712 del Código Civil y 426 del Código de Procedimiento Civil – su establecimiento queda dentro de las facultades privativas de la judicatura, sin que corresponda a esta Corte elaborar presunciones judiciales sobre la base de los antecedentes rendidos en juicio.

Así, pues, no siendo posible modificar los hechos que la judicatura del fondo ha establecido, a través de las normas invocadas, debe descartarse la infracción de las normas sustantivas planteadas, los artículos 18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, puesto que para su conculcación debió establecerse un nuevo marco fáctico, lo que no ha ocurrido en la especie.

De esta forma, es factible concluir que la motivación del libelo de casación, aunque refleja el empeño del impugnante de controvertir las reflexiones que llevaron a la judicatura a desestimar la demanda, también deja en claro que las razones y fundamentos que enderezan su cuestionamiento no se encauzan en la develación de una eventual contrariedad en la ponderación de la prueba.

En estas condiciones, sobre la base de los hechos establecidos de manera inamovible en el fallo impugnado, debe concluirse que la decisión es producto de una correcta aplicación de las normas sustantivas que regulan la materia de que se trata; razón que lleva a dirimir que el recurso presentado adolece de manifiesta falta de fundamento que autoriza desestimarlo en la presente etapa procesal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara **inadmisible** el recurso de casación en la forma y se **rechaza** el arbitrio de casación en el fondo, interpuestos contra la sentencia de dos de mayo de dos mil veinticuatro.

Acordada con el voto en contra de ministra **señora Chevesich**, quien estuvo por traer en relación el arbitrio de nulidad formal, considerando que no se encuentra en ninguna de las situaciones previstas en los artículos 772 inciso segundo y 776 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, que autorizan emitir pronunciamiento en esta etapa de tramitación, de conformidad con su artículo 781.

A la solicitud de alegatos del escrito del folio N°64550: estese al mérito de lo resuelto.



Regístrese y devuélvase.

Nº 28.843-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Ministra Suplente señora María Carolina Catepillán L., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la ministra suplente señora Catepillán y la abogada integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente la segunda. Santiago, siete de octubre de dos mil veinticuatro.



XBDXXQFDTXX

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a siete de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

